"Menos una nacional", dice Luis Ramiro Beltrán:

## No hay una política estatal de comunicación

«Me parece lamentable que el gobierno de Banzer haya suprimido sin explicación alguna el Ministerio de Comunicación Social, cuando pudo haberlo mantenido y reorientado para convertirlo en instrumento clave de los programas de desarrollo. ¿Cómo se hará la «lucha contra la pobreza» sin apoyo de comunicación?»

Uno de los expertos más famosos y antiguos del país, Luis Ramiro Beltrán, lamenta que éste y otros gobiernos bolivianos no hayan trazado políticas nacionales, estatales y gubernamentales de comunicación y atribuye el hecho al desconocimiento de los políticos sobre las funciones de la comunicación.

«La mayoría de ellos sólo ven la de propaganda y las llamadas relaciones públicas, la que construye imágenes y permite manipulación de opiniones y conductas», afirmó en una reciente entrevista con

«Pero al país no le basta ni sirve con que se cumplan tales funciones -agregó-. El pueblo necesita de una comunicación técnico-educativa que le ayude a superar la tragedia del subdesarrollo. Y, para ser eficiente, ella tiene que ser normada por alguna suerte de políticas, estrategias y pla-

En 1973 Beltrán formuló en París, por encargo de la Unesco la primera conceptualización integral sobre «Políticas Nacionales de Comunicación» (PNC), que se debatió en Bogotá en 1974, donde prouso que las políticas fueran

formuladas consensualmente por un Consejo Nacional integrado por representantes de todas las partes interesadas.

«No propuse que los gobiernos hicieran por su sola cuenta tal formulación», asegura al recordar que entre los participantes estuvieron Mariano Baptista y Hugo Alfonso Salmón.

En 1976 publicó en la revista «Nueva Sociedad» un análisis de los intentos latinoamericanos de formulación de tales políticas. Ese mismo año, recuerda, la Unesco patrocinó en Costa Rica la Primera Conferencia Intergubernamental sobre el tema.

Integrada por delegados de nivel ministerial -entre los asistentes de Bolivia estuvo Hermann Antelo-, la conferencia produjo una importante declaración y algo más detreinta recomendaciones a gobiernos y organismos internacionales.

«Unos años más tarde presidí, a pedido de la Unesco, dos reuniones de evaluación delos resultados de Costa Rica. Sólo un país, México, había intentado dicha formulación a fondo y sistemáticamente, pero un cambio político había frustrado bruscamente la aplicación del conjunto de medidas previsto».

UH: ¿Estuvo Bolivia entre los países que mostraron alguna vez la intención de formular una política nacional de comunicación?

RB: No que vo sepa. Ni siquiera ha habido aquí hasta el momento una política estatal de comunicación, menos una «PNC».

¿En1977 el gobierno del general Banzer expidió unos decretos en tal sentido que fueron rechazados por las agrupaciones profesionales y empresariales, por considerarlos antidemocráticos, obligando al régimen a anularlos. ¿Dio Ud. tal vez algún aporte a tal ejercicio?

Tales decretos fueron presentados al gabinete por la Secretaría General de la Presidencia, entonces a cargo de Javier Arce, de la que dependía la Dirección o Secretaría Nacional de Información, a cargo de Hermann Antelo. No tuve nada que ver, pues me encontraba en el país temporalmente en una misión técnica completamente ajena a la formulación de políticas. Es más, me enteré de esos decretos sólo cuando amigos me enviaron recortes de prensa a Bogotá. En mi percepción, dichos decretos no constituían una propuesta para una Política Nacional de Comunicación en el sentido de la definición que yo propusiera en París y que había sido ampliamente acogida a lo largo de la década. Se trataba solamente de un conjunto de disposiciones para fortalecer la capacidad de comunicación masiva del Estado, lo que no configuraba siquiera una política estatal. Sólo el desconocimiento de los hechos o la mala intención puede pretender atribuirme participación en ese fallido intento.

¿Ud. ha criticado al gobierno anterior por no haber formulado una política?

Cierto. Pero la referencia era a una política estatal, a un sistema normativo exclusivamente referido a los medios que posee el gobierno, no a una Política Nacional de Comunicación que, en la teoría por lo menos, abarca a todos los medios, privados y públicos, comerciales y no comerciales, masivos, interpersonales y alternativos.

¿A qué cree usted que se debió la no aprobación de aquella política estatal?

Con lúcida percepción de la importancia de la comunicación educativa para impulsar las hondas reformas que tenía en mente, el presidente Sánchez de Lozada creó el Ministerio de Comunicación Social. Por primera vez en la historia ese oficio alcanzaba tal jerarquía. Pero las personas a quienes confió la conducción de dicho órgano no cumplieron las disposiciones de la ley creadora del mismo. La primera de ellas era la de formular una política para que el Estado organizara racionalmente el empleo de los magros recursos de comunicación al servicio del desarrollo. Sin embargo, prefirieron trabajar a base de improvisación v dedicarse sobre todo a la publicidad política coyuntural en vez de apuntalar sostenida y eficazmente con comunicación técnico-educativa, los requerimientos del desarrollo nacional, especialmente en lo relativo a las reformas. Fue en el nivel de estrategias, más bien, en el que otros órganos del Estado, como la Secretaría Nacional de Participación Popular, se empeñaron en ha-

cer lo que el Ministerio no supo hacer.

¿El actual gobierno tiene una política de comunicación, si no global, por lo menos para el Estado?

Que yo sepa, hasta la fecha tampoco este régimen tiene ninguna. Considero adecuado que la comunicación política gubernamental se maneje directamente desde la Presidencia de la República. Pero me parece lamentable que haya suprimido sin explicación alguna el Ministerio de Comunicación Social, cuando pudo haberlo mantenido y reorientado para convertirlo en instrumento clave de los programas de desarrollo, especialmente los de salud, educación y participación. ¿Cómo se hará la «lucha contra la pobreza» sin apoyo de comunicación?. Esta omisión se debe, siquiera en parte, al tradicional desconocimiento de los políticos sobre las funciones de la comunicación.